

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7391-2023
CARATULADO : RUTCONSKY/FISCO DE CHILE-
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, veintisiete de Mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS

Con fecha 3 de mayo de 2023, comparece Luis Pérez Camousseight, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en representación de don RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO, pensionado, domiciliado para estos efectos en Pasaje Doctor Sótero del Río Nro. 526, oficina 707, comuna y ciudad de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado y éste a su vez por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1225 piso 2, comuna de Santiago.

Expone que acciona de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por los hechos que describe y que han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Relata de manera resumida, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fue sometido el demandante RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO, por parte de agentes del Estado y que constituyen el fundamento fáctico de esta demanda:

Don RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1 N° 21.829, nacido el 12 de Julio de 1957, de actuales 65 años de edad. A la fecha de la ocurrencia de los hechos trabajaba como obrero y vivía en la Población La Victoria.

.- Fue detenido, de manera completamente ilegal y sin mediar orden judicial alguna, en varias oportunidades, entre los años 1982 y 1987. La primera detención fue efectuada por carabineros, en su domicilio, el día 10 de Octubre de 1982, siendo conducido don Rodolfo a la 11º Comisaría de Carabineros ubicada en la Población José María Caro. Según el recurso de amparo que presentó su cónyuge en esa oportunidad, ante la Iltna. Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, personal de carabineros irrumpió violentamente en el hogar de don Rodolfo, procediendo, sin orden alguna, a llevarse detenidos a mi representado y a su hermano Víctor. Al momento de su detención, don Rodolfo fue brutalmente golpeado por cinco carabineros, quedando herido en el cráneo, debiendo ser llevado desde la comisaría hasta la Posta del Hospital Barros Luco, donde le suturaron la herida con cinco puntos, quedando, finalmente, en libertad, el día 15 de Octubre de 1982.



.- Fue detenido el día 14 de Mayo de 1983, durante un operativo realizado por militares, carabineros y civiles en la Población La Victoria, siendo dejado en libertad el mismo día, después de ser fichado.

.- Fue detenido el día 15 de Noviembre de 1984, en su domicilio, durante un operativo realizado en la Población La Victoria por civiles, militares y carabineros, siendo conducido en un bus policial hasta el Estadio San Eugenio, siendo luego dejado en libertad el mismo día sin que se le formulara acusación alguna.

.- Finalmente, fue detenido el día 07 de Octubre de 1987, por efectivos de la Policía de Investigaciones, en su lugar de trabajo, y conducido hasta el Aeródromo de Tobalaba donde fue torturado e interrogado por efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y luego hasta la 22° Comisaría de Investigaciones, lugar donde permaneció hasta las 12:00 horas del día siguiente 08 de Octubre de 1987, día y hora en que queda en libertad. Don Rodolfo refiere que, con ocasión de esta detención, fue vendado, amarrado y torturado por sus captores mediante la aplicación de golpes de pies y puños en distintas partes de su cuerpo e interrogado acerca de las supuestas armas en poder de “los curas de La Victoria”.

Prosigue, dando cuenta del informe psicológico de evaluación de daño asociado a violencia política que le fue realizado a don Rodolfo por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de fecha 11 de Marzo de 2023, y sostiene que como consecuencia directa de las torturas sufridas por su representado se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, físico y moral incommensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Además de un perjuicio material evidente. Precisa que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de treinta y cinco años de lo sucedido, su representado continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido.

En el apartado del derecho, plantea que por los hechos delictivos narrados, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que quienes los perpetraron eran miembros del Ejército de Chile, de Carabineros de Chile de la Policía de Investigaciones de Chile y de la CNI, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. Agrega que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como “Informe Valech”.

En este mismo sentido, plantea que la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a su mandante, emana de la Constitución Política de la República, que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que las torturas sufridas por mi mandante constituyen graves violaciones a los derechos humanos



y crímenes de lesa humanidad, por lo que se generó responsabilidad internacional del Estado de Chile, de la que deriva la obligación de reparar. Precisado aquello, se extiende en el análisis de las disposiciones constitucionales, legales y en los fundamentos de derecho internacional que obligan al Estado de indemnizar, acápiteme en el cual cita jurisprudencia.

Concluye su presentación y solicita en definitiva, que se acoja en todas sus partes la demanda y declarar que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a don RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Con fecha 27 de junio de 2023, se notifica la demanda y su proveído con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 18 de julio de 2023, comparece Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, con domicilio en calle Agustinas N°1225 piso 4, Santiago, Región Metropolitana, quien contesta dentro de plazo legal la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeleo, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos, solicitando rechazar dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que desarrolla.

En primer lugar, opone la excepción de cosa juzgada por existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, respecto de don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeleo. Expone que el demandante ya demandó al Fisco por indemnización de perjuicios por la detención ilegal y apremios que habría sufrido, en la causa caratulada “SALGADO SALGADO Y OTROS CON FISCO DE CHILE”, DEL 14° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO; Rol: C-1890-2006, dictándose en esos autos, sentencia definitiva que rechazó la demanda por acoger la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios, la cual fue confirmada por la I. Corte de apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada. Afirma que concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que el señalado actor demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de éste por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado. Luego, analiza los fundamentos de derecho que sustentan su excepción (art. 1567 N°3 C. Civil; arts. 175 y 177 C.P.C) y cita jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema (Rol 20.520-2018, Rol 44.407-2020, Rol 333.444-2020)

En subsidio, hace valer la excepción de reparación integral, sobre la base que el demandante Sr. Rutconsky Quiñeleo, habría recibido los beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Asimismo, la reparación



no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones, y al efecto menciona el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS); beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda. Agrega que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones (reparaciones simbólicas).

Sostiene que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, como el cúmulo de reparaciones antes indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos.

Enseguida opone la excepción de prescripción extintiva de la acción incoada, de acuerdo a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen un plazo de 4 años para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado desde la perpetración del acto. Si bien los hechos se remontan a los años 1981 y 1987, se reconoce la suspensión de la prescripción durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer acciones ante los tribunales de justicia; no obstante, entre la restauración de la democracia y hasta la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 27 de junio de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, se invoca también, la prescripción de 5 años del artículo 2.515 del Código Civil; y cita en su favor la sentencia de unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema de 2013, en causa rol N°10.665-2011, que habría zanjado esta materia.

En subsidio de las excepciones precedentes, formula alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el excesivo monto pretendido de \$200.000.000:

- 1.- La indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.
- 2.- La regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.



3.- No procede en caso alguno la aplicación de reajustes e intereses, dado que ello solo cabe cuando existe una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, situación que aún no ocurre.

En definitiva, la parte demandada solicita el rechazo de la demanda; o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 27 de julio de 2023, se evacua el trámite de la réplica, oportunidad en que la parte demandante se hace cargo de las excepciones opuestas por el demandado Fisco de Chile y, en particular, respecto de la cosa juzgada, apela a que reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha indicado que esta institución no opera tratándose de acciones civiles que emanan de delitos de lesa humanidad, haciendo primar, a este respecto, la normativa de derecho internacional por sobre el derecho interno (Sentencia de casación, Rol 149.250-20, dictada con fecha 14 de Junio de 2022).

Con fecha 8 de agosto de 2023, el Fisco de Chile procede a evacuar el trámite de la dúplica.

Con fecha 27 de septiembre de 2023, se recibe la causa a prueba y posteriormente se acoge la reposición deducida por la parte demandada, por lo que sus puntos quedan redactados en los términos que se leen en resolución dictada el 29 de enero de 2024 (folio 29).

Con fecha 11 de marzo de 2024, se cita a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por lo principal de la presentación de fecha 3 de mayo de 2023, comparece Luis Pérez Camousseight, abogado, quien en representación convencional de don RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, y pide que el ente estatal sea condenado a pagar en su favor \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), o la suma que el tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, a título de indemnización por el daño moral que se le infirió con ocasión de la privación de libertad y torturas de las que fue víctima su representado a manos de agentes del Estado.

SEGUNDO: Que, por lo principal de la presentación de fecha 18 de julio de 2023, comparece Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, quien en representación de demandado Fisco de Chile y dentro de plazo legal, contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios y opone la excepción de cosa juzgada, que funda en el hecho de que ya se ejerció una acción por los mismos hechos, demandándose de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile en causa caratulada “SALGADO SALGADO Y OTROS CON FISCO DE CHILE”, de la cual conoció el 14º Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-1890-2006. Explica que la sentencia definitiva acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, lo que fue posteriormente confirma en segunda instancia y rechazado el recurso de casación deducido ante la Excma. Corte Suprema.



En subsidio, plantea la excepción reparación integral, por ser el demandante beneficiario de las leyes de reparación, sin perjuicio de existir resarcimientos de tipo simbólicas y programas de beneficios asistenciales para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, en subsidio de la anterior, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, y subsidiariamente, la prescripción de 5 años contemplada en el artículo 2515 en relación con el 2514 del mismo cuerpo legal.

Por último, también en subsidio, alegó lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por el demandante y que, en todo caso, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

TERCERO: Que, en su escrito de réplica, la parte demandante solicita el rechazo de la excepción de cosa juzgada y hace suyos los fundamentos dados por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación dictada el 14 de Junio de 2022, causa Rol 149.250-20, los cuales transcribe. En lo demás, el escrito de réplica reafirma los argumentos dados en la demanda.

CUARTO: Que, el demandado Fisco de Chile evacua su dúplica, reiterando de forma sintética los argumentos ya vertidos en su contestación.

QUINTO: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompaña legalmente y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:

En folio 24:

- Informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política de don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de fecha 11 de marzo de 2023.

En folio 25:

1.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

2.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

3.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.



5.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

En folio 26:

1.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

2.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo figura con el número 21.829.

3.- Copia de antecedentes de carpeta de don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura.

4.- Sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 14 de Junio de 2022 dictada en los autos rol de ingreso Excma. Corte Nro. 149.250-20.

5.- Sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 14 de Junio de 2022 dictada en los autos rol de ingreso Excma. Corte Nro. 149.250-20.

SEXTO: Que, el demandado Fisco de Chile acompañó en apoyo de sus asertos y en forma legal, sin objeción de contrario, el Oficio N° 4792-15744 emitido por el Instituto de Previsión Social con fecha de 21 de agosto de 2023 (folio 17), según el cual don Rodolfo Estéban Rutconsky Quiñeolo, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), es beneficiario de las leyes de reparación N°19.992 y 20.874.

Asimismo, para sustentar su excepción de cosa juzgada, al momento de contestar la demanda (folio 9) acompaña los siguientes documentos relativos a la causa seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-1980-2006, caratulada “Salgado y otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios por daño moral:

- .- Copia de la demanda;
- .- Sentencia de primera instancia junto a su sentencia de complementación;
- .- Sentencia de segunda instancia;
- .- Fallo de casación dictado por la Excma. Corte Suprema.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la excepción de cosa juzgada que se alega por el demandado, del mérito de los antecedentes del proceso, especialmente de las sentencias acompañadas en el motivo sexto, aparecen como hechos asentados que el demandante don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, junto a otras personas que se individualizan, dedujeron ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-1890-2006, demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido – en el caso específico del actor que aquí interesa - por las detenciones ilegales y torturas sufridas a manos de agentes del Estado, la que fue desestimada por estimarse que la acción intentada se encontraba prescrita. Dicha sentencia fue confirmada por la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de enero de 2014 (Rol Civil 7649-2011), y posteriormente la Excma. Corte Suprema desestimó el



recurso de casación en el fondo deducido, según se lee en su sentencia de fecha 19 de noviembre de 2014 (Rol 7888-2014).

OCTAVO: Que, para resolver sobre este punto, no puede menos que compartirse y hacer propios los razonamientos vertidos por la Excma. Corte Suprema en su sentencia de casación dictada con fecha 13 de octubre de 2022 (CS Rol 104.558-2020), en orden a que la institución de la cosa juzgada no puede excusar al Estado de Chile del deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes.

El artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad dos de las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, estas son, las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En consecuencia, la obligación de respetar dicho ejercicio y goce, exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Por su parte, la obligación de garantizar, exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

En relación a lo anterior, en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que dicha obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, *“la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”*

NOVENO: Que, conforme al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y



aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

En efecto, es un principio general de derecho internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación.

Respecto de tales delitos y conforme al derecho internacional humanitario corresponde al Estado (de Chile), luego de investigar los hechos y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, sean directas o indirectas, además de garantizar la no reiteración de aquellos. Tales obligaciones tienen carácter internacional y como fuente un conjunto de convenciones y el derecho consuetudinario.

DÉCIMO: Que, la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A mayor abundamiento, en la citada sentencia de nuestro Máximo Tribunal y como expone en su prevención el Ministro Sr. Haroldo Brito Cruz, *“resulta imprescindible tener presente la interpretación que la Corte Interamericana ha realizado del artículo 63.1 de la Convención que, en un caso reciente en el que precisamente declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por un asunto idéntico a la demanda de autos, estableció que -consecuentemente con el cambio jurisprudencial reconocido por esta Corte Suprema en orden a no declarar la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por perjuicios morales ocasionados por violaciones a los derechos humanos- “en este tipo de casos el instituto de la cosa juzgada no debería constituir un obstáculo para que las víctimas del presente caso –o personas que se encuentren en situaciones análogas– puedan finalmente acceder a las reparaciones que les puedan corresponder por vía judicial” (Caso Órdenes Guerra y Otros VS. Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 114)”*.

En tales condiciones, de acogerse la excepción de cosa juzgado por aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como se recoge en la prevención, *“implicaría no solo invocar disposiciones de Derecho interno para justificar el incumplimiento del deber de otorgar una reparación integral que impone un tratado*



internacional sobre derechos humanos ratificado y vigente, sino además –y de modo más grave aún– implicaría comprometer una vez más la responsabilidad internacional del Estado al privar a los recurrentes por segunda vez del derecho a la tutela judicial efectiva, que bajo la interpretación de la Corte Interamericana comprende la obligación estatal de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos humanos y fundamentales; obligación que “no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial son “verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación” (Caso Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012 (fondo y reparaciones), párr. 261; y ya antes en Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 177)”.

Por todo lo previamente razonado, esta primera excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado Fisco de Chile, debe ser desestimada.

UNDÉCIMO: Que, previo a seguir con el análisis de las restantes excepciones opuestas por el demandado, conviene dejar asentado que ha de tenerse por acreditado que don Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, fue víctima de violaciones a los derechos humanos, por parte de agentes del Estado de Chile. Lo anterior, se colige de modo directo, preciso, grave y concordante, mediante la apreciación y valoración conjunta de los instrumentos acompañados por las partes a los presentes autos, consistentes en:

- 1.- Oficio N° 4792-15744 del Instituto de Previsión Social, que da cuenta que el demandante Sr. Rutconsky Quiñeolo es beneficiario de la pensión otorgada por la Ley 19.992 como del aporte único otorgado por la Ley N° 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura.
- 2.- Copia de la nómina Informe Valech, en la que se consigna con el número 21829 al demandante Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, como víctima reconocida de prisión política y torturas por parte de agentes del Estado.

A mayor abundamiento, la circunstancia reseñada precedentemente, no fue controvertida por la parte demandada en sus escritos de discusión, centrando sus argumentos en la improcedencia de la indemnización solicitada por encontrarse reparado el daño y, en subsidio, por encontrarse prescrita la acción.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la



ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por las leyes N° 19.123, N°19.992 y N°20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

DECIMOTERCERO: Que, los vejámenes de los que fue víctima el demandante, han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los Derechos Humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales:

.- que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4);

.- que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5);

.- que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7);

.- que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17);

.- que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32);

.-que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63);

.- que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

Asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año



1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los Derechos Humanos Fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

DECIMOCUARTO: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de Derechos Humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, se dictó en el año 1992 la Ley N° 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los Derechos Humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$1.353.798 y \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley N° 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

DECIMOQUINTO: Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas "*leyes de reparación*", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política sistemática de violación a tales derechos fundamentales, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciadas permitidas y equiparidad de beneficios que involucran. Lo anterior, no importa ni menos autoriza a desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente



con la pretensión que aquí se persigue por vía jurisdiccional, pero no incompatible con ésta.

En tal sentido, el propio artículo 4° de la ley N° 19.123 dispone que “en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente. En consecuencia, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (v.gr. *CS en roles 1092-2015; 17730-2015; 12636-2018; 16908-2018; 22101-2019*).

De acuerdo a lo razonado, procede el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DECIMOSEXTO: Que, el demandado también opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los Derechos Humanos, la que adquiere rango constitucional. Luego la prescripción extintiva de la acción deducida no puede, por tanto, decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

DECIMOSEPTIMO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la



imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los Derechos Humanos, sino que también repararlos en su integridad.

En los términos que se viene razonando, la acción resarcitoria derivada de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de dichos delitos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto.

En todo caso, incluso si se apela a la normativa interna que regula el instituto de la prescripción extintiva, lo cierto es que el propio demandado ha reconocido en su contestación que ésta se mantuvo suspendida durante el tiempo por el cual se prolongó la dictadura militar; y, con posterioridad, es el propio reconocimiento que el Estado de Chile hace de quienes fueron víctimas de prisión política y tortura, como el aporte que entrega a quienes en dicha calidad reconoce como beneficiarios de las prestaciones contenidas en las Leyes N°s 19.992 y 20.874, hechos inequívocos de que la prescripción que ha podido estar corriendo se ha visto interrumpida naturalmente.

Por las razones dadas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también ha de ser desestimada.

DECIMOCTAVO: Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, cabe decir que en la especie, conforme el mérito del Oficio N° 4792-15744 del Instituto de Previsión Social, que da cuenta que el demandante Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, es beneficiario tanto de la pensión otorgada por la Ley 19.992 como del aporte único otorgado por la Ley N° 20.874 a las víctimas de tortura; y de la copia de la nómina Informe Valech, en la cual se le consigna como víctima reconocida con el N° 21829, resulta irrefutable por el propio reconocimiento que de tan dolorosos sucesos de nuestra historia ha hecho el Estado de Chile, que el demandante fue sometido a torturas por parte de sus agentes.

También se tendrá por acreditado el daño moral propio producido por las detenciones ilegales y torturas inferidas al demandante Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, porque este hecho es suficiente por sí mismo y consustancial bajo un criterio



de normalidad, para generar una lesión en su esfera extrapatrimonial de tal magnitud que a pesar de que sus detenciones ilegítimas se produjeron entre los años 1982 a 1987, es decir, cuando cursaba sus 25 a 30 años de edad, actualmente, contando ya con 67 años, las traumáticas experiencias de tortura vividas en manos de sus captores han marcado para siempre su existencia y ni aun el transcurso de los años le ha permitido superarlo, manifestándose en el daño que consigna el instrumento denominado “Informe Psicológico Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política”, suscrito por Miguel Ángel Varas Mendoza, psicólogo dependiente del Programa PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, quien refiere haber evaluado al demandante y recoge su relato en el que da cuenta de los siguientes episodios: a) Primera detención (10 de octubre de 1982); b) Segunda detención (14 de mayo de 1983); c) Tercera detención (15 de noviembre de 1984); d) Cuarta detención (7 de octubre de 1987).

En el mencionado instrumento, el profesional arriba a la conclusión de que *“Existe un daño asociado a causa del evento represivo que ha permanecido en Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeleo y su familia en relación a ser afectado directo junto a su familia por las detenciones, violencia, prisión política y tortura y persecución a Rodolfo y a su familia. Las secuelas de las vulneraciones en su familia se han extendido desde las percepciones de cada miembro de la familia, lo que generó conductas de desorganización familiar y efectos de traumatización extrema y trauma transgeneracional en el grupo familiar a causa de la violencia ejercida por instituciones del Estado en dictadura militar.”*:

Sobre el impacto que en la esfera emocional y espiritual del actor provocaron estos hechos, el mencionado informe da cuenta de consecuencias en lo social (pérdida de amigos, familiares, discriminación y desarticulación de redes de apoyo); en la salud (neurosis depresiva, trastorno de estrés post traumático, pérdida de memoria, alteración del ánimo frente a estímulos externos, sintomatología depresiva, estado hiperalerta y temeroso frente a estímulos violentos externos); repetición mental del hecho traumático, así como sentimientos de aislamiento o resentimiento con respecto al entorno o al marco social en su conjunto, persistencia de episodios de angustia, todo lo cual da cuenta de un daño emocional y síndrome de estrés post traumático relacionado a la violencia ejercida.

Así las cosas, no habiéndose rendido prueba en contrario por el demandado, el tribunal tiene por acreditada la existencia del daño moral demandado por el actor y la concurrente lesión que tan traumáticos acontecimientos provocaron a su proyecto de vida.

DECIMONOVENO: Que, la privación de libertad y torturas sufridas, produjeron

una aflicción tanto espiritual como física que el demandante ha debido sufrir y sobrellevar, todo lo cual es consecuencia del sistemático y despiadado actuar llevado a cabo por agentes del Estado en ese aciago período de nuestra historia.



El hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue, es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo tras ser detenido ilegalmente y privado de libertad en diversas ocasiones durante el período que va entre los años 1982 a 1987, siendo sometido a torturas y tratos degradantes, a lo que cabe agregar el tenor y la angustia que ha debido generar en el actor la sensación de acoso y persecución constante por parte de los órganos represivos del régimen militar, que se refleja en sus reiteradas detenciones. De esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por Rodolfo Esteban Rutconsky Quiñeolo, encontrándose el demandado Fisco de Chile en la obligación de indemnizarlo.

VIGÉSIMO: Que, el artículo 2329 del Código Civil contiene una regla general que es aplicable a toda responsabilidad causada por un hecho ilícito, incluso a la que se persigue en autos, tal es que todo daño debe ser reparado y en toda su extensión (*principio de reparación integral del daño*). Tratándose de daños extrapatrimoniales, tal principio deberá ser leído a la luz de la especial naturaleza de éstos, y que, en consecuencia, la indemnización tiene un carácter compensatorio.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, corresponde entrar a ponderar el quantum indemnizatorio de estos daños, para lo cual se tendrán en consideración dos elementos; por un lado, la magnitud del impacto sufrido por el actor producto de los hechos narrados y, por otro lado, los pagos realizados por el demandado Fisco de Chile a fin de reparar el daño causado.

Sobre lo primero, se estará al análisis efectuado en los considerandos décimootavo y décimonoveno. Sobre lo segundo, cabe tener presente que el demandado acompañó oficio emanado del Instituto de Previsión Social, que da cuenta que el demandante ha sido beneficiario tanto de la Pensión Ley N°19.992 y Aporte Único Ley N°20.874, por lo que al mes de agosto de 2023 había percibido la suma total de \$37.174.605, y su pensión mensual a la sazón ascendía a \$230.025. En razón de lo expuesto, habida consideración del carácter satisfactivo de la indemnización y que esta no puede en modo alguno constituir una fuente de enriquecimiento, es que se evaluará prudencialmente la compensación del daño moral en la suma de \$70.000.000 (setenta millones de pesos).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, finalmente, se comparte la posición esgrimida por el demandado Fisco de Chile en cuanto a que la obligación en un monto susceptible de reajustes, para que no se vea afectada por una pérdida de valor en razón de la inflación, sólo quedará determinada una vez ejecutoriada la sentencia; y en lo que respecta a los intereses corrientes, éstos sólo podrán devengarse constituido que sea en mora el deudor. Luego, será en estos términos que se accederá a pretensión de reajustes e intereses que formula el actor.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas.



POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 356, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **se declara:**

I.- Que, se rechazan las excepciones de cosa juzgada, reparación integral y prescripción extintiva, opuestas por el demandado Fisco de Chile en su escrito de contestación.

II.- Que, **se acoge la demanda de indemnización de perjuicios** deducida con fecha 3 de mayo de 2023, solo en cuanto se condena al demandado **FISCO DE CHILE** al pago de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) en favor del demandante, **RODOLFO ESTEBAN RUTCONSKY QUIÑELEO**, por concepto de daño moral por las detenciones ilegales y torturas cometidas por agentes del Estado de Chile, suma que debe ser pagada debidamente reajustada según la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que esta sentencia quede debidamente ejecutoriada y hasta su pago efectivo, devengando intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional desde la fecha en que el deudor sea constituido en mora con ocasión del cumplimiento incidental de esta sentencia.

III.- Que, cada parte soportará sus costas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE
ROL C-7391-2023

DICTADO POR MANUEL JESUS FIGUEROA SALAS, JUEZ
TITULAR DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintisiete de Mayo de dos mil veinticuatro**

